



PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA CIVIL SUBESPECIALIDAD COMERCIAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA - Sistema de Notificaciones Electrónicas SINOE
SEDE LA MAR,
Vocal: DIAZ VALLEJOS Jose Wilfredo FAU 20546303951 soft
Fecha: 12/01/2023 11:29:28, Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL, D. Judicial: LIMA / COMERCIALES, FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA - Sistema de Notificaciones Electrónicas SINOE
SEDE LA MAR,
Vocal: ESCUDERO LOPEZ Jose Clemente FAU 20546303951 soft
Fecha: 12/01/2023 12:19:19, Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL, D. Judicial: LIMA / COMERCIALES, FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA - Sistema de Notificaciones Electrónicas SINOE
SEDE LA MAR,
Vocal: PRADO CASTAÑEDA Ana Mariu FAU 20546303951 soft
Fecha: 12/01/2023 17:35:34, Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL, D. Judicial: LIMA / COMERCIALES, FIRMA DIGITAL

EXPEDIENTE : 00217-2022-0-1817-SP-CO-0
DEMANDANTE : PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
DEMANDADO : CONSORCIO PRO RURAL
MATERIA : ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL

RESOLUCIÓN NÚMERO DIEZ.-

Miraflores, once de enero
de dos mil veintitrés.-

Sumilla: ES INVIABLE EL RECURSO DE ANULACIÓN QUE BUSCA CUESTIONAR O CALIFICAR LOS CRITERIOS O MOTIVACIONES O INTERPRETACIONES EXPUESTAS POR EL TRIBUNAL ARBITRAL.

VISTOS:

De fojas 3 a 17 del Expediente Judicial Electrónico, obra el recurso de anulación de fecha 27 de abril de 2022 interpuesto por el **PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL** contra el laudo arbitral de fecha 12 de enero de 2022. Admitido a trámite mediante Resolución N° 02 de fecha 19 de mayo de 2022, ha sido absuelto por el demandado **CONSORCIO PRO RURAL** por escrito de fecha 27 de junio de 2022 que obra de fojas 157 a 165. Realizada la vista de la causa, producida la votación de acuerdo a Ley, se procede a emitir la siguiente resolución. Interviniendo como **ponente el Juez Superior Díaz Vallejos**.

CONSIDERANDO:

A. Las causales de anulación.

PRIMERO: El recurso de anulación en estudio se ha presentado por las causales previstas en los literales **b) y c)** del numeral 1 del artículo 63 del Decreto Legislativo N° 1071, a saber :

Artículo 63.- Causales de anulación. 1

1. El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe:

(...).

b. Que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos.

c. Que la composición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se han ajustado al acuerdo entre las partes o al reglamento arbitral aplicable, salvo que dicho acuerdo o disposición estuvieran en conflicto con una disposición de este Decreto Legislativo de la que las partes no pudieran apartarse, o en defecto de dicho acuerdo o reglamento, que no se han ajustado a lo establecido en este Decreto Legislativo.

(...)”

B. Argumentos de las partes.

SEGUNDO: La parte recurrente, expone lo siguiente:

III. FUNDAMENTOS DE LA CAUSAL INVOCADA EN EL PRESENTE RECURSO DE ANULACION DE LAUDO PARCIAL

14. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 64 de la Ley de Arbitraje, procedemos a fundamentar las causales del presente recurso de anulación:

EL LAUDO PARCIAL, QUE CONTIENE LA DECISIÓN SOBRE LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA FORMULADO POR EL CONSORCIO PRO RURAL, ES NULO AL RECAER EN LA CAUSAL B) Y C) DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 63° DE LA LEY DE ARBITRAJE

15. El literal c) del numeral 1 del artículo 63° de la Ley de Arbitraje, establece como supuesto de anulación de laudo arbitral cuando la composición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se han ajustado al acuerdo entre las partes o al reglamento arbitral aplicable, salvo que dicho acuerdo o disposición estuvieran en conflicto con una disposición de este Decreto Legislativo de la que las partes no pudieran apartarse, o en defecto de dicho acuerdo o reglamento, que no se han ajustado a lo establecido en este Decreto Legislativo.



16. Como se podrá advertir, la causal allí señalada sanciona el laudo arbitral con nulidad cuando las actuaciones arbitrales no se han ajustado al acuerdo entre las partes.

17. El numeral 1) del artículo 13° de la Ley de Arbitraje, respecto al contenido del convenio arbitral, señala que *"El convenio arbitral es un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o de otra naturaleza"*
18. Ahora bien, en la medida que el convenio arbitral constituye, en esencia, un acuerdo, las partes tiene la libertad de establecer las condiciones que se tienen que cumplir para poder recurrir al arbitraje.
19. En el presente caso, consideramos el laudo arbitral adolece de vicios que generan su nulidad; toda vez que el Tribunal Arbitral adoptó decisiones que no se han ajustado al acuerdo entre las partes, específicamente a lo que establece el convenio arbitral, conforme lo demostraremos en los siguientes numerales:

SOBRE EL PROCESO ARBITRAL EXP 2208-170-19

20. El 17 de abril de 2019, bajo el Exp 2208-170-19 la Entidad inicia el proceso arbitral contra el Consorcio Pro Rural ante el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP por las controversias del Contrato N°006-2013-PNSR, formulando la siguiente pretensión:

"Se deje sin efecto la resolución del contrato, realizada por el contratista, mediante carta notarial N° 728-2018-CONSORCIO PRO RURAL/PNSR de fecha 05.09.2018 y notificada el 06.09.2018"

21. De forma paralela, el Contratista también inicio un proceso arbitral (Exp N° 1936-336-18) ante el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP por las controversias del Contrato N°006-2013-PNSR, formulando las siguientes pretensiones en la solicitud de arbitraje:

V. PRETENSIONES

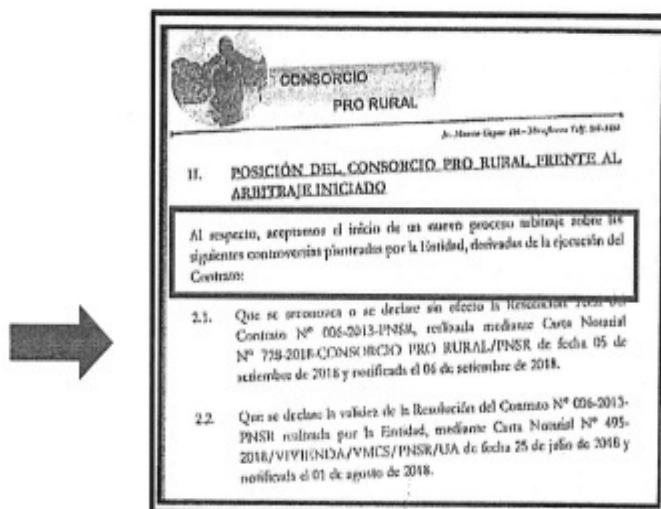
- 5.1 Declarar la nulidad, invalidez o ineficacia del apercibimiento realizado por la Entidad mediante Carta Notarial N° 365-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR/LA de fecha 18 de junio de 2018.
- 5.2 Declarar la nulidad, invalidez e ineficacia de las observaciones realizadas por la Entidad mediante el referido Informe Técnico N° 040-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP/AE-AORE de fecha 09 de julio de 2018, al ser las mismas inexigibles.

- 5.3 Declarar la nulidad, invalidez o ineficacia de la decisión de disponer la resolución parcial del Contrato, realizado por la Entidad mediante Carta Notarial N° 495-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA de fecha 02 de agosto de 2018.
- 5.4 Declarar la nulidad, invalidez o ineficacia del apertibimiento realizado por la Entidad mediante Carta Notarial N° 369-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA de fecha 18 de junio de 2018.
- 5.5 Declarar la nulidad, invalidez e ineficacia de las observaciones realizadas por la Entidad mediante el referido Informe Técnico N° 30-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP/AE-AORE de fecha 31 de mayo de 2018, que resultan inexigibles respecto a los Términos de Referencia del Contrato y por subsanadas las que fueron presentadas de manera previa a la resolución del Contrato dispuesta por nuestra parte.
- 5.6 Declarar la nulidad, invalidez o ineficacia de la decisión de disponer la resolución parcial del Contrato, realizada por la Entidad mediante Carta Notarial N° 567-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA de fecha 03 de septiembre de 2018.
- 5.7 Determinar que la prestación contractual es única, siendo la misma la ejecución integral del Ítem 5, por lo que no corresponde la resolución parcial.
- 5.8 Determinar como inexigibles las observaciones realizadas por la Entidad respecto a todos los Expedientes Técnicos por el supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, por ende no estar sujeto a cualquier tipo de penalidad.
- 5.9 Que se reconozca de los mayores servicios por trabajos en redes de Alcantarillado y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en 5 Localidades no contemplados en el contrato ni en los documentos que los conforman.
- 5.10 Que se apruebe Prestación Adicional para concluir con los estudios de Alcantarillado y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en (5) Localidades ascendente a 681,432.30 soles.
- 5.11 Que se apruebe los Expedientes Técnicos de las Localidades de Camantavishi, Tincareni, Potsoteni, Quempiari - Yoyato y San Juan de Kihate ya concluidos y entregados a la Entidad; como consecuencia, se nos pague el monto correspondiente a 138,481.05 soles.
- 5.12 Que se nos reconozca los Gastos Generales generados por los prolongados tiempos que la Entidad se ha tomado para efectuar las observaciones ascendente a 1'570,650.64 soles.

22. Ahora bien, el Consorcio Pro Rural formuló excepción de incompetencia contra nuestra demanda arbitral del Exp 2208-170-19, señalando que en el proceso arbitral del Exp N° 1936-336-18, venía siendo materia de controversia dentro de sus pretensiones la resolución de contrato efectuado por la Carta Notarial N° 728-2018-CONSORCIO PRO RURAL/PNSR de fecha 05.09.2018.

23. Siendo así, la Entidad procedió a absolver la excepción de incompetencia, señalando entre otros que cuando mi representada pretendió acumular la pretensión referida a la invalidez de la Carta de resolución de contrato N° 728-2018-CONSORCIO PRO RURAL/PNSR al Exp 1929-9329-18 (único expediente arbitral por el Contrato 006-2013-PNSR vigente para dicho entonces) a fin de que en un solo proceso

arbitral se discutan las controversias del Contrato N°006-2013-PNSR, el Contratista rechazó la acumulación y manifestó su aceptación a que se inicie un nuevo proceso arbitral donde se discuta la invalidez de la Carta N° 728-2018-CONSORCIO PRO RURAL/PNSR:



24. En efecto, la cláusula Décimo Octava del Contrato N°006-2013-PNSR señala que las partes podrán acordar que cuando existe un proceso arbitral en curso y suja una nueva controversia relativa al mismo contrato, solo procederá la acumulación de procesos y/o pretensiones siempre y cuando exista común acuerdo entre ellas formalizado por escrito. Siendo así, y teniendo presente que el Contratista rechazó nuestra acumulación al Exp 1929-329-18, mi representada en virtud del derecho de acción que le asiste, tuvo que iniciar un nuevo proceso arbitral – es decir el Exp N°2208-170-19.
25. Ahora bien, teniendo claro ello, el Consorcio Pro Rural de forma temeraria y desmedida, cuando interpone su demanda arbitral en el Exp 1936-336-18 en fecha 27.08.2019 – cuando ya tenía conocimiento de nuestras pretensiones del Ex 2208-170-19 – formula las siguientes pretensiones:

"PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Ratificar la resolución del Contrato N° 006-2013-PNSR: Elaboración de Perfiles y Expedientes Técnicos para la Instalación, Rehabilitación, Mejoramiento y/ o Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de 201 Centros Poblados del Ambito Rural - Grupo N° 4 Item 5, por incumplimientos contractuales de la Entidad y otros, conforme al procedimiento resolutorio iniciado por el Consorcio Pro Rural con Carta Notarial N° 480-2019/Consorcio Pro Rural/PNSR y Carta Notarial N° 492-2019/Consorcio Pro Rural/PNSR Carta Notarial N° 728-2018-Consorcio Pro Rural/PNSR de fecha 06 de septiembre de 2018.

SEGUNDA PRETENSION PRINCIPAL: Declarar la nulidad, invalidez o ineficacia del apercibimiento realizado por la Entidad mediante Carta Notarial N° 365-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA de fecha 18 de junio de 2018 y la decisión de disponer la resolución parcial del Contrato, realizada mediante Carta Notarial N°495-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA de fecha 02 de agosto de 2018.

TERCERA PRETENSION PRINCIPAL: Declarar la nulidad, invalidez o ineficacia del apercibimiento realizado por la Entidad mediante Carta Notarial N° 369-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA de fecha 18 de junio de 2018 y de la resolución parcial del Contrato, realizada por la Entidad mediante Carta Notarial N° 567-2018/VIVIENDA/VI1CS/PNSR/UA de fecha 05 de septiembre de 2018.

CUARTA PRETENSION PRINCIPAL: Determinar que la prestación contractual es única, siendo esta la ejecución integral del ítem 5, por lo que no corresponde la determinación de supuestos incumplimientos parciales, ni la aplicación de penalidades por localidades.

QUINTA PRETENSION PRINCIPAL: Determinar que procede el pago por los expedientes técnicos de las localidades de Camantavishi, Tincarení, Potsotení, Quempiri y San Juan de Kibate ya concluidos y entregados a la Entidad por un monto ascendente a S/ 138,481.05*

26. Conforme se puede observar, dichas pretensiones de la demanda arbitral del Exp 1936-336-18 distan totalmente de las fórmulas en la solicitud de arbitraje del Consorcio, por lo que teniendo presente que la Entidad inició el arbitraje del Exp N°2208-170-19 en fecha 17.04.2019 y la demanda arbitral del Consorcio fue interpuesta de forma posterior el 27.08.2019, el Programa Nacional de Saneamiento Rural sometió a controversia de forma primigenia la invalidez de la Carta Notarial N° 728-2018-CONSORCIO PRO RURAL/PNSR de fecha 05.09.2018.

27. Sin embargo, en el Laudo Arbitral que resuelve sobre la excepción de incompetencia, objeto de anulación, el Tribunal Arbitral ÚNICAMENTE se ha limitado a señalar en el numeral 69, lo siguiente:

69. Por tanto, en el proceso arbitral seguido por las partes signado con expediente N° 1936-336-18-PUCP, se ha sometido a competencia de aquel tribunal la controversia referida al procedimiento resolutorio iniciado por el consorcio, el mismo que está ad portas de expedir pronunciamiento de fondo. Por tanto, aquel tribunal ha arraigado competencia sobre el particular, en consecuencia, este tribunal se declara incompetente para analizar el fondo de dicha materia controvertida en el presente proceso.

28. Conforme se puede observar, el Colegiado lejos de efectuar el análisis sobre la oportunidad en el tiempo sobre qué parte procesal sometió primero a controversia la Carta Notarial N° 728-2018-CONSORCIO PRO RURAL/PNSR, solo se ha limitado a señalar que se ha sometido a competencia del Tribunal Arbitral del Exp 1936-336-18 el procedimiento de la resolución de contrato y el mismo estaría en estado de emitir

Lauda Arbitral, lo cual no resulta ser cierto toda vez que en dicho expediente aún no se ha emitido Lauda Arbitral.

29. En esa línea de ideas, bajo la incorrecta decisión del Tribunal Arbitral, **SE HA VULNERADO, TRANSGREDIDO Y LIMITADO NUESTRO DERECHO DE ACCIÓN** al declarar fundada una excepción que conlleva a que el Expediente Arbitral N°2208-170-19 concluya, sin resolver el fondo de la controversia, específicamente la invalidez de la carta de resolución de contrato N° 728-2018-CONSORCIO PRO RURAL/PNSR, lo que reiteramos resulta una arbitrariedad y una flagrante afectación a los derechos constitucionales que le asisten a mi representada.

30. Lo que es cierto, es que mi representada válidamente inició el proceso arbitral dentro del plazo de caducidad que establece la norma de contrataciones y en virtud del convenio arbitral suscrito entre las partes, sin cuestionamiento y objeción del Contratista al momento de contestar la solicitud arbitral; sin embargo, el Tribunal Arbitral desconoce dicha actuación, es decir la de haber ejercido válidamente nuestro derecho de acción frente a esta resolución de contrato arbitraria.

31. Ahora bien, debemos tener presente que, el principio del Pacta Sun Servanda supone que el contrato crea entre las partes un vínculo obligacional de ineludible cumplimiento (con fuerza de ley), y conforme al axioma pacta sunt servanda, integrador de la consecución de la seguridad en el tráfico jurídico.

32. Del mismo modo, el artículo 1361° del Código Civil recoge el principio **pacta sunt servanda** el cual significa que los acuerdos entre las partes o pactos deben cumplirse en sus propios términos, no pudiendo exigirse algo distinto de lo convenido salvo que ellas mismas, expresa o tácitamente acuerden modificar los alcances de lo convenido, dicho acuerdo de voluntades requiere en los sujetos intervinientes la fides; la actitud honrada, leal, recta, justa, sincera e íntegra, apoyada en la confianza del cumplimiento y el valor de la palabra dada, para dar y recibir cada parte lo que le corresponda⁵.

33. Es importante mencionar, que la postura del Tribunal es que el arbitraje del Exp 1936-336-18 se encuentra "ad portas" de emitir lauda arbitral; sin embargo, no se puede desconocer los acuerdos pactados por las partes, máxime cuando se encuentran contenidos en el convenio arbitral.

⁵ A. Castresana, Fides, Bona fides, un concepto para la creación del derecho, Madrid 1991. La actitud exigida se considera como la capacidad de libertad individual y responsabilidad frente a la otra parte, y provendría de las obligaciones nacidas del pacto concertado (Y. Picod, Le devoir de loyauté dans l'exécution du contrat, Paris 1989).

34. Sobre ello, y como es de conocimiento, el convenio arbitral es el acuerdo de las partes para someter sus controversias a la decisión de un Tribunal arbitral, sin su existencia no es posible hablar de arbitraje. El convenio arbitral es el punto de partida y el eje del procedimiento arbitral.

35. En efecto, la Ley de arbitraje en el literal c) del numeral 1 del artículo 63° de la Ley de Arbitraje, establece como supuesto de anulación de laudo arbitral cuando la composición del tribunal o las actuaciones arbitrales no se han ajustado al acuerdo entre las partes, por lo que declarar fundada una excepción de incompetencia para no conocer nuestra pretensión de la demanda arbitral, constituye una vulneración al acuerdo contenido en el convenio arbitral. Esta causal está relacionada íntimamente con la prevalencia y respeto de la voluntad de las partes; y es precisamente que se trata de salvaguardar esa libertad cuando se anularía un laudo por no haberse respetado el procedimiento previamente fijado por ellas o por las normas a las que se sometieron. Es un reconocimiento de poder a las partes el cual "no sólo implica la capacidad de darlo por terminado o de suspenderlo, a las cuales hace referencia la cita anterior, sino que, además, lleva consigo la necesidad de reconocer a las partes la facultad de dar forma y regular libremente el procedimiento arbitral⁶.

36. Agregado a ello, se debe tener en cuenta el artículo 1314° del Código Civil establece que "Quién actúa con la diligencia ordinaria requerida, no es imputable por la inexecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso". Sin embargo, se evidencia que el Contratista a pesar de conocer que existía un proceso arbitral iniciado por mí representada, inicia paralelamente otro a fin de discutir sobre la resolución de contrato formulando además excepción de incompetencia, cuando claramente no son las mismas pretensiones en discusión.

37. Pese a ello, se verifica que el Tribunal Arbitral en la Decisión N°13 y Decisión N° 16 se mantiene en su posición referida a que la excepción de incompetencia es fundada, y por lo tanto no resulta competente para emitir pronunciamiento respecto de nuestra pretensión de la demanda, que fue materia de la excepción planteada, vulnerando nuestro derecho de acción.

38. Ahora bien, respecto del literal b) del numeral 1 del artículo 63° de la Ley de Arbitraje, establece como supuesto de anulación de laudo arbitral, una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos.

⁶ Santistevan de Noriega, Jorge (mayo 2007) "Confusiones sobre el convenio arbitral y sus alcances en sede casatoria, en Revista Peruana de Arbitraje. N° 5, 2007. 411

39. Considerando que el inciso b) del mencionado artículo 63°, establece la posibilidad de interponer una demanda de anulación de laudo si es que, por alguna razón, una de las partes no ha podido hacer valer sus derechos, es decir, si su derecho al debido proceso ha sido vulnerado, corresponde que esta vulneración de derecho en el laudo arbitral se avalúe.
40. Al respecto cabe señalar que el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, o como en este caso, resoluciones arbitrales, resulta ser un derecho inmerso dentro de un derecho más amplio como es el derecho al debido proceso.
41. Asimismo, corresponde resaltar que el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho público y subjetivo mediante el cual toda persona, natural o jurídica, que sea sujeto de derechos, está facultada a exigirle al Estado distintos derechos como el de acceso a la justicia, derecho al debido proceso, derecho a una resolución fundada en derecho, entre otros. Este derecho fundamental, no solo es exigible en el proceso civil, sino también en el arbitraje.
42. Es por ello que *"el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, al tener naturaleza constitucional, resulta aplicable tanto al proceso judicial como al arbitral, motivo por el cual su afectación puede ser invocada como causal de anulación de laudo de acuerdo a lo dispuesto por la Duodécima Disposición Complementaria del DLA"*⁷.
43. En atención a la falta de motivación en el Laudo Arbitral y de la Decisión que resuelve los recursos contra el Laudo, el Tribunal Arbitral no ha fundamentado en derecho la razón por la cual correspondería declarar fundada la excepción de incompetencia, solo se ha limitado a señalar que existiría similitud entre las pretensiones; sin embargo, aquello no resulta cierto en tanto las pretensiones de la Entidad como la del Contratista son diferentes en forma y fondo.
44. Por lo que, el Tribunal Arbitral, ha incumplido la Ley de Arbitraje, la misma que en su artículo 56° ha establecido lo siguiente:

"Artículo 56.- Contenido del laudo.

1. Todo laudo deberá ser motivado, a menos que las partes hayan convenido algo distinto o que se trate de un laudo pronunciado en los términos convenidos por las partes conforme al artículo 50. (...)"

⁷ Reggiardo Saavedra, M. La anulación de laudo arbitral por afectación a la tutela jurisdiccional efectiva. En: Constitución y proceso. Lima: ARA editores E.I.R.L., 2009, pp. 331-332.

45. A partir del articulado glosado, se acredita indubitadamente que, por imperio normativo, el colegiado DEBÍA MOTIVAR SU FALLO y conforme hemos advertido no ha cumplido con dicho mandato legal y en adición a ello, ha declarado fundada la excepción de incompetencia deducida por el Consorcio Pro Rural, SIN RESPETAR NI TOMAR EN CONSIDERACION NUESTROS DESCARGOS EN DONDE SE HA ADVERTIDO QUE NO EXISTE SIMILITUD ENTRE LAS PRETENSIONES DEL EXP N°2208-170-19 Y EXP N°1936-336-18, MÁS AÚN CUANDO EL PNSR ES QUIEN SOMETIO PRIMERO A CONTROVERSI LA INVALIDEZ DE LA CARTA NOTARIAL N° 728-2018-CONSORCIO PRO RURAL/PNSR.

46. Considerando que existe una vulneración de parte del colegiado al no haber motivado su laudo arbitral, se habría configurado una afectación al debido proceso, por lo que destacamos lo señalado por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 01620-2009-HC/TC, Sentencia de fecha 23.06.2009:

"5. De otro lado, el artículo 139°, inciso 3, de la Constitución establece que son principios y derechos de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional; en consecuencia, cuando el órgano jurisdiccional administra justicia está obligado a observar los principios, derechos y garantías que la Constitución establece como límites del ejercicio de las funciones asignadas.

6. En ese sentido, la necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y al mismo tiempo es un derecho constitucional de los justiciables. Mediante la motivación, por un lado, se garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículos 45° y 138° de la Constitución) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa. Justamente, con relación al derecho a la debida motivación de las resoluciones, este Tribunal ha precisado que "la Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica congruente entre lo pedido y lo resuelto, y que, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aún si ésta es breve o concisa (...)" (STC N.° 1291-2000-AA/TC, fundamento 2)."

47. Para mayor abundamiento, de acuerdo a Marcial Rubio Correa: "Para el Tribunal Constitucional el debido proceso (...) incluye todas las normas constitucionales de forma y de fondo aplicables, así como las principales disposiciones de legislación de jerarquía inferior que contribuyen a garantizar la aplicación de los derechos constitucionales. No es un concepto restrictivo sino extensivo." ("La Interpretación de la Constitución según el Tribunal Constitucional", PUCP, Fondo Editorial, pag. 315).

48. De la cita precedente y sentencia emitidos por el Tribunal Constitucional se puede apreciar que la garantía del debido proceso debe primar en toda instancia, incluso la arbitral. Por ello, toda resolución que emita una instancia jurisdiccional (mandato que no se restringe a los órganos del Poder Judicial, sino también a toda entidad que resuelva conflictos, incluido los Tribunales Arbitrales) debe estar debidamente motivada. Ello significa que debe quedar plenamente establecida a través de sus considerandos, la ratio decidendi por la que se llega a tal o cual conclusión.

49. El derecho a la motivación es un presupuesto fundamental para el adecuado y constitucional ejercicio del derecho a la tutela procesal efectiva, y por tanto del debido proceso.

TERCERO: El demandado absuelve el recurso de anulación en base a las siguientes alegaciones:

2. **RESPECTO A LOS SUPUESTOS FUNDAMENTOS QUE VALIDAN EL RECURSO DE ANULACIÓN INTERPUESTO POR EL PNSR**

Según lo señalado por la recurrente, correspondería declarar la nulidad del Laudo Arbitral “por haber adoptado – el tribunal arbitral – decisiones que no se ajustan al acuerdo entre las partes”.

Como fundamento normativo de lo señalado, la recurrente se sustenta en los literales a) y c) del artículo 63º de la Ley de Arbitraje, Decreto Legislativo N° 1071, los mismos que darían fundamento jurídico a los dos hechos antes descritos.

2.1 **RESPECTO A LA SUPUESTA AFECTACIÓN AL DERECHO DE ACCIÓN SEGÚN EL LITERAL A) DEL ARTÍCULO 63º DEL D.L. 1071**

El primer hecho que constituye el fundamento para argumentar el recurso de anulación de laudo se refiere a la supuesta **afectación al derecho de acción** a partir del hecho de declarar fundada la excepción de incompetencia.

La recurrente señala que, con ella inició válidamente un proceso arbitral, planteó su pretensión sin cuestionamiento del contratista en

la respuesta a la solicitud, pero el tribunal arbitral desconoce dicha acción.

Sin embargo, podrá el juzgador confirmar la ausente sustentación probatoria del recurso interpuesto al verificar, con la simple lectura del Laudo Arbitral, puesto que la pretensión presentada por la recurrente resulta ser idéntica a la presentada previamente por nuestra parte en un proceso anterior y que, viene siendo conocido por un tribunal arbitral.

La recurrente, en esa arbitraria interpretación del convenio arbitral pretende requerir que el tribunal arbitral conozca de la pretensión de invalidez de la **CARTA N° 728-2019-CONSORCIO PRO RURAL/PNSR de fecha 05.09.2018** cuando ella y **TODO EL PROCEDIMIENTO RESOLUTORIO DE LA QUE DERIVA RESULTA COMPETENCIA DE OTRO TRIBUNAL ARBITRAL.**

Así, en el escrito de respuesta a su solicitud de arbitraje, nuestra parte simplemente manifiesta que **ACEPTA** el inicio de un nuevo proceso de arbitraje, pero ello no supone **RECONOCER COMPETENCIA AL TRIBUNAL ARBITRAL.**

En tal sentido, la recurrente evidencia el poco conocimiento respecto a la oportunidad de formular oposición o excepción al arbitraje, puesto que, el hecho de aceptar el inicio de un proceso arbitral no supone la renuncia a las acciones que, concordante con el derecho constitucional a la defensa, corresponde a nuestra parte.

Por tanto, el único cuestionamiento respecto a la supuesta aceptación de nuestra parte a un nuevo proceso arbitral no resulta elemento suficiente para determinar que la materia controvertida puesta en competencia del primer tribunal arbitral haya dejado de ser de su conocimiento.

Es más, la recurrente no se percató que la pretensión que solicita sea resuelta por el tribunal arbitral fue materia del pedido de una acumulación, solicitud que fue rechazada por nuestra parte y cuyo resultado supone el inicio de la presente acción.

En tal sentido, en atención al principio de los actos propios, se confirma que la Entidad reconoce que pretendió acumular la **pretensión** al proceso arbitral que se encuentra en trámite, pero que nuestra parte **rechazó** el pedido de acumulación.

Que, por tanto, pretendió iniciar un proceso arbitral nuevo, luego del **rechazo de nuestra parte** y, presenta una solicitud de arbitraje, la misma que, nuestra parte acepta y respecto a la cual se formula la

excepción de incompetencia, debido a que, constituido el tribunal arbitral se evidencia que la recurrente pretende conformar otro órgano competente para conocer la misma materia.

2.2 RESPECTO A LA “MOTIVACIÓN APARENTE” COMO CAUSAL DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL

La recurrente pretende que la jurisdicción ordinaria interfiera en la decisión jurisdiccional del fuero arbitral, pretensión que ha sido materia de cientos sino miles de sentencias en sede judicial, ratificando la autonomía del fuero arbitral respecto a las materias de libre disposición.

El artículo 62.2 del Decreto Legislativo 1071 dispone expresamente que para los jueces ***“está prohibido bajo responsabilidad, pronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral”***.

Munné Catarina afirma que *“...El alcance de este control judicial, como ha expresado de forma reiterada la doctrina y la jurisprudencia, se limita al juicio externo de la observancia de los límites de la jurisdicción arbitral y de las mínimas garantías formales que constituyen los motivos de impugnación expresamente previstos*

en la Ley, pero sin entrar en ningún caso en el mayor o menor fundamento de lo decidido, ni en la valoración de la prueba.

*Por tanto no se trata de valorar el juicio del árbitro en cuanto a los hechos y la equidad o el derecho aplicable a los mismos, sino de garantizar el cumplimiento de las garantías formales que la Ley establece como límites a la actuación del árbitro, de quien le haya designado y de quien administre el arbitraje, exclusivamente por los motivos de impugnación previstos ..., que entendemos constituyen un *numerus clausus*, dada la expresión que emplea el legislador en cuanto a que el laudo «sólo podrá ser anulado» cuando se alegue y pruebe que concurre una de las causas que se relacionan en dicho precepto...”¹*

Así como también Cantuarias Salaverry quien afirma “...aun cuando los jueces encuentren que los árbitros han incurrido en errores de apreciación de los hechos o han aplicado erróneamente el derecho, por ningún motivo podrán modificar lo decidido en el laudo, simplemente porque dicha función, para bien o para mal, fue asignada libremente por las partes de manera exclusiva a los árbitros”.²

La recurrente ha sido enfática en su recurso respecto a la necesidad de salvaguardar el principio *pacta sunt servanda*, por tanto, en esa misma línea argumentativa, el juzgador deberá ratificar que la **libertad contractual** y **de contratar** se encuentran confirmadas y garantizadas con la decisión de ambas partes de incorporar un convenio arbitral como mecanismo de solución de controversias.

C. Reclamo previo en sede arbitral.

CUARTO: En cuanto al reclamo previo en sede arbitral, se expone lo siguiente:

Conforme es de verse del escrito de demanda, las causales invocadas en el presente recurso de anulación son las establecidas en los incisos b) y c) del numeral 1 del artículo 63 del Decreto Legislativo N° 1071 .

Al respecto, el artículo 63 inciso 2 del Decreto Legislativo N° 1071 señala que las causales previstas en los incisos a), b), c) y d) del numeral 1 del artículo en mención, sólo serán procedentes si fueron objeto de reclamo expreso en su momento ante el tribunal arbitral por la parte afectada y fue desestimada.

De fojas 120-124 se aprecia que la recurrente presentó su **recurso post laudo** con argumentos similares al contenido del presente recurso de anulación. Éste pedido fue declarado improcedente mediante **Resolución N° 16 de fecha 30 de marzo de 2022** obrante de fojas 126-131.

Siendo así, corresponde a este Colegiado Superior emitir pronunciamiento en torno a la anulación presentada por el recurrente.

D. Análisis del caso y posición del colegiado.

QUINTO: Conforme a las reglas del artículo 62.2 de la Ley de Arbitraje: *“Está prohibido bajo responsabilidad, pronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral”*. El límite legal anterior guía el trabajo de revisión judicial de un laudo en sede judicial.

Es decir, la función de control asignada por la ley de arbitraje no comprende la posibilidad jurídica de revisar cuestiones de fondo, pues ello vulneraría el principio de irrevisabilidad del laudo; dicho de otro modo, el recurso de anulación no es una instancia de grado sino por el contrario es un proceso autónomo que controla el cumplimiento de determinados requisitos de validez del laudo, por causales taxativas previstas en la ley.

SEXTO: Ahora, en el recurso de anulación se invocan las causales de anulación b) y c), el sustento y/o discusión de las citadas causales se concentran en supuestos vicios derecho de acción y debido proceso (motivación).

Al respecto, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 00142-2011-PA/TC (caso Sociedad Minera de Responsabilidad Ltda. María Julia), publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de octubre de 2011, ha establecido como precedente constitucional vinculante una serie de reglas jurídicas en materia de amparo contra laudos arbitrales.

De acuerdo al mencionado precedente (fundamentos 20a y 20b):

a) El recurso de anulación previsto en el Decreto Legislativo N° 1071, que norma el arbitraje y, por razones de temporalidad, los recursos de apelación y anulación para aquellos procesos sujetos a la Ley General de Arbitraje (Ley N° 26572) constituyen vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias para la protección de derechos constitucionales, que determinan la improcedencia del amparo de conformidad con el artículo 5°, inciso 2), del Código Procesal Constitucional, salvo las excepciones establecidas en la presente sentencia.

b) De conformidad con el inciso b) del artículo 63° del Decreto Legislativo N° 1071, no procede el amparo para la protección de derechos constitucionales aún cuando éstos constituyan parte del debido proceso o de la tutela procesal efectiva. La misma regla rige para los casos en que sea de aplicación la antigua Ley General de Arbitraje, Ley N° 26572.”

Conforme al citado precedente vinculante, el recurso de anulación de laudo es una vía procedimental específica, igualmente satisfactoria para la protección de derechos constitucionales; es decir, con motivo del recurso de anulación es factible que la justicia ordinaria analice si en el proceso arbitral se ha vulnerado algún derecho constitucional, entre ellos, el **derecho a la motivación de las resoluciones**.

El derecho al debido proceso, reconocido como derecho fundamental por el artículo 139.3 de la Constitución Política del Perú, contiene un haz de garantías, entre las cuales se encuentra el **derecho a la motivación**, regulado en el inciso 5) del artículo 139 de la Constitución, que establece: *“Son principios y derechos de la función jurisdiccional: La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias”*.

El Tribunal Constitucional en la STC N° 01480-2006- AA/TC, ha señalado que el derecho a la motivación de las resoluciones: *“(…) importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, (…) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso (…)”*.

Sobre la inexistencia de motivación o motivación aparente el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 728-2008-HC/TC, fundamento 7.a) enseña que:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

SETIMO: A continuación, se procede con el análisis del caso.

7.1. En el laudo el sustento de la excepción formulada por el consorcio y la absolución de la entidad es el siguiente:

Razonamiento del tribunal sobre la excepción de incompetencia

56. Este tribunal es el competente para resolver las controversias sometidas a su competencia, en virtud de la cláusula décimo octava (captura de pantalla):

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA:

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en el artículo 144°, 170°, 175°, 176°, 177° y 179° del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52° de la Ley de Contrataciones del Estado.

Las partes acuerdan que las controversias que surjan sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato, se someterán obligatoriamente a conciliación; y, de no llegarse a acuerdo conciliatorio alguno, se resolverá mediante arbitraje, con excepción de aquellas referidas en el artículo 23° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y demás que por su naturaleza sean excluidas por ley.

Si la conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes se someterán a un Arbitraje de Derecho para que se resuelvan las controversias definitivamente. La solicitud de arbitraje y la respuesta de ésta, se efectuarán conforme a lo dispuesto por los artículos 215°, 218° y 219° del Reglamento.

Independientemente del monto de la cuantía o de si esta es indeterminada, la(s) controversia(s) será(n) resuelta(s) por un Tribunal Arbitral conformado por tres (03) árbitros; de los cuales, obligatoriamente, uno deberá ser ingeniero civil o sanitario.

Vencido el plazo para la respuesta a la solicitud de arbitraje sin que se hubiera designado el árbitro correspondiente, la parte interesada solicitará al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, la respectiva designación, acorde a lo establecido en los artículos 219° y 220° del Reglamento.

La designación de árbitro efectuada por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú en defecto de las partes, será inimpugnable.

Las partes acuerdan que los honorarios de los árbitros y el cobro de los gastos administrativos (incluidos gastos secretariales) no excederán lo que corresponda según el Tarifario de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, vigente a la fecha de presentación de la solicitud arbitral.

Asimismo, las partes podrán acordar que el proceso arbitral será realizado bajo la organización, administración y reglas del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sin perjuicio de lo expresamente estipulado en la totalidad de la presente cláusula arbitral.

Las partes podrán acordar que cuando exista un proceso arbitral en curso y surja una nueva controversia relativa al mismo Contrato, sólo procederá la acumulación de procesos y/o pretensiones siempre que exista común acuerdo entre ellas formalizado por escrito.

El Laudo Arbitral emitido obliga a las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa; teniendo el valor de cosa juzgada y se ejecutará como una sentencia. Queda perfectamente entendido que las partes no le confieren al Tribunal Arbitral la posibilidad de ejecutar el Laudo.

Las partes podrán acordar que de considerar necesario interponer recurso de anulación del Laudo Arbitral ante el Poder Judicial, no constituirá requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario, fianza solidaria por el monto laudado o cualquier otro tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse.

57. Nótese que la relación jurídica procesal de las partes en contienda en el presente arbitraje, emana de la voluntad de ambas a dirimir las controversias que se presenten durante la etapa de la ejecución contractual mediante arbitraje. Ello en tanto nuestra normativa ha recogido un concepto amplio al considerar que toda controversia que deriva de un contrato puede ser sometida a un arbitraje, tomando un criterio positivo al permitir la "arbitrabilidad" de las materias.
58. Un debate que suele presentarse, entre las partes de un proceso arbitral, es si se puede o no arbitrar determinada controversia, como una condición de "arbitrabilidad" subjetiva. Otro debate puede surgir en torno a saber qué materias pueden o no ser arbitrables, es decir, cuáles son las condiciones de "arbitrabilidad" objetiva.
59. Sobre este segundo debate, las legislaciones han optado por tener una visión publicista del arbitraje, en la cual es el estado el que permite qué materias pueden ser sometidas a controversia.
60. Entre las normas especiales, mediante las cuales el estado ha determinado que ciertas materias sean sometidas a arbitraje, tenemos las contenidas en la Ley de Arbitraje. El artículo 45, inciso 1, establece lo siguiente: "Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez

del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes”.

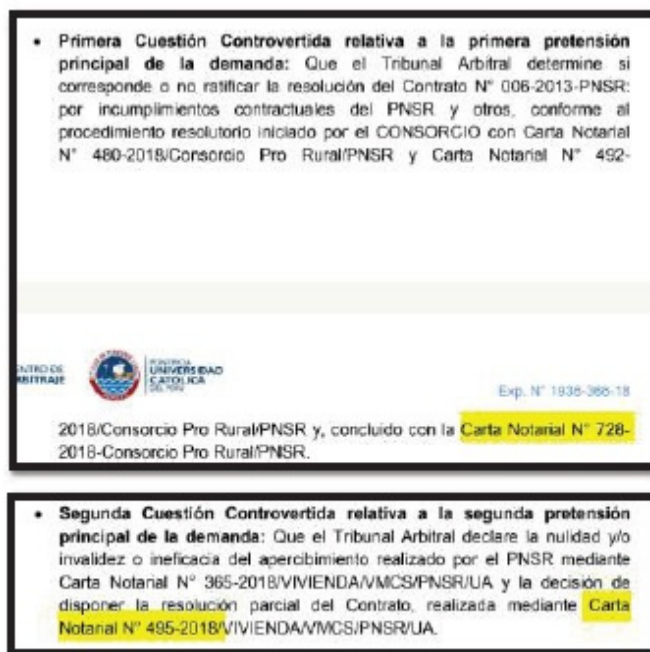
61. Por otro lado, el artículo 41 de la Ley de Arbitraje regula la competencia del Tribunal Arbitral para decidir sobre su propia competencia. El inciso 1 contiene la siguiente regla: “El Tribunal Arbitral es el único competente para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones u objeciones al arbitraje relativas a la inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia del convenio arbitral o por no estar pactado el arbitraje para resolver la materia controvertida o cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia. Se encuentran comprendidas en este ámbito las excepciones por prescripción, caducidad, cosa juzgada y cualquier otra que tenga por objeto impedir la continuación de las actuaciones arbitrales”.
62. Respecto a la excepción de incompetencia, Castillo, Sabroso, Castro y Chipana¹ señalan que dentro las excepciones más comunes se encuentra la excepción de incompetencia, a través de la cual se denuncian los vicios de la competencia del árbitro y es procedente cuando se interpone la demanda por controversias que no pueden ser sometidas a arbitraje o que no han sido debidamente iniciadas de acuerdo con la norma legal respectiva.
63. En el presente caso, en principio, no encontramos supuestos que, de manera general, impidan la “arbitrabilidad” objetiva de la controversia. Sin embargo, debemos examinar más de cerca, si existe alguna circunstancia, en el caso concreto, que genere dificultades o impactos sobre la “arbitrabilidad” subjetiva.
64. El tribunal toma en cuenta que las partes han sometido anteriormente a arbitraje las controversias derivadas de la ejecución del contrato N° 006-2013-PNSR. Así, en el expediente N° 1936-336-18-PUCP, el contratista mediante demanda arbitral de fecha 27 de agosto de 2019 sometió a competencia de aquel tribunal las siguientes pretensiones (captura de pantalla):

1.1. **PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:** Ratificar la resolución del Contrato N° 006-2013-PNSR: Elaboración de Perfiles y Expedientes Técnicos para la Instalación, Rehabilitación, Mejoramiento y/o Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de 201 Centros Poblados del Ámbito Rural – Grupo N° 4 Ítem 5, por incumplimientos contractuales de la Entidad y otros, conforme al procedimiento resolutorio iniciado por el Consorcio Pro Rural con Carta Notarial N° 480-2019/Consorcio Pro Rural/PNSR y Carta Notarial N° 492-2019/Consorcio Pro Rural/PNSR de fechas 25 y 27 de junio de 2018, respectivamente y, concluido con la

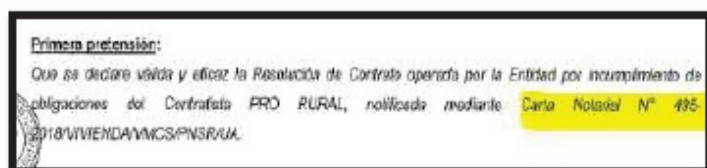
Carta Notarial N° 728-2018-Consorcio Pro Rural/PNSR de fecha 06 de septiembre de 2018.

1.2. **SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL:** Declarar la nulidad, invalidez o ineficacia del apercibimiento realizado por la Entidad mediante Carta Notarial N° 365-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA de fecha 18 de junio de 2018 y la decisión de disponer la resolución parcial del Contrato, realizada mediante Carta Notarial N° 495-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA de fecha 02 de agosto de 2018.

65. Así, el 5 de noviembre de 2019, mediante decisión N° 4, el tribunal arbitral en el expediente N° 1936-336-18-PUCP resolvió fijar los puntos controvertidos que serán materia de pronunciamiento -entre ellos- los siguientes (captura de pantalla):



66. Por otro lado, en el expediente N° 1929-329-18-PUCP, la entidad formuló demanda arbitral en fecha 15 de enero de 2020, solicitando -como primera pretensión- la declaración de validez y eficacia practicada por ella, conforme se advierte a continuación (captura de pantalla):



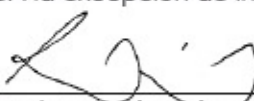
67. Ante ello, el contratista formuló excepción de incompetencia debido a que dicha pretensión tenía identidad con la segunda pretensión de la demanda. Por tanto, el 8 de marzo de 2021, mediante decisión N° 9, el tribunal arbitral del expediente N° 1929-329-18-PUCP resolvió a través de Laudo Parcial declarar fundada la excepción de incompetencia promovida por el contratista, toda vez que, el litigio vinculado a la validez o invalidez de la resolución contractual practicada por entidad es de competencia del tribunal arbitral conformado en el expediente N° 1936-336-18-PUCP, el mismo que se encuentra en fase de alegatos finales.
68. Ahora bien, en el presente proceso, la entidad sometió a competencia de este tribunal la siguiente pretensión (captura de pantalla):


Primera Pretensión: Que se declare nulidad y/o invalidez de la resolución parcial del Contrato N° 006-2013-PNSR, practicada por el CONSORCIO CONSULTOR PRO RURAL, mediante **Carta Notarial N°728-2018/Consortio Pro Rural/PNSR** de fecha 05 de setiembre de 2018 y notificada el 06 de setiembre de 2018


69. Por tanto, en el proceso arbitral seguido por las partes signado con expediente N° 1936-336-18-PUCP, se ha sometido a competencia de aquel tribunal la controversia referida al procedimiento resolutorio iniciado por el consorcio, el mismo que está ad portas de expedir pronunciamiento de fondo. Por tanto, aquel tribunal ha arraigado competencia sobre el particular, en consecuencia, este tribunal se declara incompetente para analizar el fondo de dicha materia controvertida en el presente proceso.
70. No es de recibo el argumento de la entidad, según el cual la discusión en el expediente N° 1936-336-18-PUCP es sobre ratificación o no del procedimiento de resolución contractual, mientras que en este proceso se discute la validez o no de la resolución contractual. Ambos debates pasan necesariamente por una análisis de validez del acto resolutorio y, en esa medida, están inextricablemente vinculados.
71. ¿Cuándo podemos decir que un acto es válido desde la perspectiva jurídica? Cuando el acto responde a sus elementos conformantes y cuando sigue el procedimiento previsto en la ley o reglamento de la materia. En nuestro caso concreto, el análisis de validez consiste en examinar si la parte que efectuó la resolución del contrato lo hizo activando una causal materialmente válida según el ordenamiento de contrataciones estatales y si lo hizo en estricto cumplimiento del procedimiento reglamentado para tal fin.
72. Por estas razones, estimaremos la excepción de incompetencia propuesta.

III. DECISIÓN

ÚNICA: Declaramos FUNDADA la excepción de incompetencia promovida por el consorcio.


Ricardo Antonio León Pastor
(Presidente del Tribunal Arbitral)


Alberto Molero Rentería (Árbitro)


Rubén Gómez Sánchez (Árbitro)

7.2. En el recurso de anulación, los supuestos vicios o vulneraciones que sustentan las causales de anulación b) y c), son los siguientes:

- Que el laudo arbitral ha resuelto la excepción de incompetencia limitándose únicamente a lo señalado en el fundamento 69.
- Que en vez de analizarse en el laudo qué parte sometió oportunamente a controversia la Carta N° 728-2018-CONSORCIO PRO RURAL/PNSR sólo se limitó a señalar que el Tribunal Arbitral se sometió a la competencia del proceso 1936-336-18 el cual estaría en estado de emitirse laudo arbitral, lo cual no es cierto.
- Que se ha vulnerado su derecho de acción al no haberse resuelto el fondo de la controversia, esto es, la invalidez de la Carta de resolución de contrato N° 728-2018, ya que inicio válidamente el proceso arbitral dentro del plazo de caducidad sin cuestionamiento alguno del Contratista al momento de contestar la solicitud arbitral.
- Que el Tribunal Arbitral no puede desconocer los acuerdos pactados por las partes contenidos en el convenio arbitral, por lo que al declarar fundada la excepción de incompetencia para NO conocer la pretensión de su demanda arbitral constituye una vulneración al acuerdo contenido en el convenio arbitral.
- Que el Tribunal Arbitral no ha fundamentado en derecho la razón por la cual corresponde declarar fundada la excepción de incompetencia, pues solo se ha limitado en señalar que existiría similitud entre las pretensiones, lo que no resulta cierto en tanto que son diferentes en forma y fondo.
- Que el Tribunal Arbitral debió motivar el fallo y no ha respetado ni tomado en cuenta sus descargos cuando advirtió que no existe similitud entre las pretensiones del Exp. N° 2208-1 70-19 y Exp. N° 1936-336-18, más aún, cuando la entidad sometió primero a controversia la invalidez de la Carta Notarial 728-2018.

OCTAVO: Como se dijo, el recurso en estudio solicita la nulidad del laudo acusando vulneración al derecho de acción y problemas de motivación.

8.1. El Tribunal Arbitral ha señalado – al resolver la excepción de incompetencia- en esencia lo siguiente:

- En principio, refiere que en el expediente N° 1936 -336-18-PUCP, por demanda arbitral de fecha 27²⁵ de agosto de 2019 el **Contratista**

sometió a competencia de aquel tribunal las siguientes pretensiones:
Ratificar la resolución de contrato realizada por el Contratista y concluida por Carta N°728-2018 y la Nulidad, Invalidez o ineficacia de la resolución parcial de contrato realizada por la Entidad por Carta N° 495-2018

- En segundo lugar, ha señalado el Tribunal Arbitral que en el Exp. N° 1929-329-18 la Entidad formuló demanda arbitral solicitando la validez y eficacia de la resolución de contrato practicada por ella por Carta N° 495-2018.
- En función de lo anterior, el tribunal arbitral señala que en el expediente N° 1929-329-18-PUCP declaró fundada la excepción de incompetencia promovida por el contratista por considerar que el litigio vinculado a la validez o invalidez de la resolución contractual practicada por la entidad es de competencia del tribunal arbitral conformado en el expediente N° 1936- 336-18-PUCP, el mismo que se encuentra en fase de alegatos finales.
- Ahora, sobre el Exp. N° 2208-170-19 el Tribunal Arbitral – al resolver la excepción de incompetencia formulada por el Consorcio- precisó que la demanda arbitral interpuesta por la Entidad tuvo como pretensión la Nulidad o Invalidez de la resolución parcial del contrato practicada por el Consorcio por Carta N° 728-2018 y que en el proceso arbitral seguido por las partes signado con Exp. N°1936-336-18- se ha sometido a competencia de aquel tribunal la controversia referida al procedimiento resolutorio iniciado por el consorcio, el mismo que está ad portas de expedir pronunciamiento de fondo, CONCLUYENDO que aquel tribunal ha arraigado competencia sobre el particular, esto es, que aquel Tribunal que tramita el Exp N° 1936-336-18 tiene competencia para conocer la controversia sometida a la resolución de contrato realizada por el Contratista.
- Agrega, como sustento de su decisión, que no existe diferencia de pretensiones (alegada por la Entidad al absolver la excepción en cuanto en una se trataría de RATIFICAR y en la otra la invalidez o validez) por considerar que ambos debates (RATIFICAR y/o INVALIDEZ de la resolución de contrato practicada por la Contratista)

pasan necesariamente por un análisis de validez del acto resolutivo y que, por ello, están inextricablemente vinculados

8.2. De lo anterior, primero, se colige que el laudo y/o el pronunciamiento del Tribunal Arbitral ha cumplido con el estándar de motivación, primero al haber dado respuesta a las alegaciones de las partes, específicamente a lo expuesto por la Entidad ahora recurrente (8 folios 95-96); segundo, ha verificado las pretensiones postuladas por ambas partes en los Expedientes N° 1936-336-19 y N° 2208-170-18; tercero, ha sustentado su decisión, esto es, ha expuesto las razones del fallo; cuarto, las conclusiones del Tribunal Arbitral tienen relación con lo actuado y lo alegado por las partes. Es decir, el laudo si tiene motivación, la misma que se encuentra acorde a las reglas del artículo 122 del Código Procesal Civil.

NOVENO: De lo precedentemente expuesto, se concluye:

- Que la recurrente acusa supuestas vulneraciones al derecho de acción (debido proceso), sin embargo ello no es así, en tanto que la decisión impugnada ha sido respuesta a un pedido del Contratista (excepción) mecanismo procesal que no supone límite al derecho de acción.
- Que la recurrente insiste en que el Tribunal Arbitral debió emitir un pronunciamiento de fondo, esto es, pretende que este órgano jurisdiccional revise el fondo de la decisión arbitral, actividad que no corresponde a este colegiado, pues se ingresaría al razonamiento arbitral, ya que la tarea en este recurso es verificar si el laudo vulnera el debido proceso y, en específico, si está o no motivado; es decir, si cuenta o no con razones y ello ha sido corroborado, conforme a lo precedentemente expuesto, esto es, en el laudo se ha señalado las razones que sustentan lo decidido, lo que implica que la protesta de la recurrente es inviable, en atención a las reglas del artículo 62.2 de la Ley de Arbitraje.
- Que el sustento del recurso de anulación discrepa del criterio arbitral al insistir que no existe similitud de las pretensiones – argumento de su absolución de excepción-, también al sostener que es falso que el Exp. 1936-336 se encontraba en estado de emitir el laudo, y al

señalar que se habría vulnerado el acuerdo de las partes, entre otras discusiones, que en nada converge con las causales de anulación invocadas en el recurso.

- Se corrobora la disconformidad de la recurrente cuando señala que el laudo tiene como unico sustento el numeral 69 del laudo, sin tener en cuenta que el derecho de motivación exige una respuesta clara, precisa y concreta más no extensa.
- Por lo demás, el alegato de que su demanda fue presentada en primer lugar o antes que la propuesta en el Exp., N° 1936-338, no supone vicio de motivación ni afectación al debido proceso.
- En atención a lo expuesto, el recurso en estudio debe desestimarse al no haberse acreditado lo que se alega, como lo exige el artículo 63 de la Ley de arbitraje.
- En esta resolución solo se expresan las razones esenciales y determinantes de la decisión que se adopta, tal como lo autoriza el artículo 197 del Código Procesal Civil.
- Finalmente, estando a que la entidad recurrente es un programa adscrito y/o forma parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 413 del Código Procesal Civil, corresponde la exoneración de las costas y costos de este proceso.

Por estas razones:

DECLARARON:

INFUNDADO EL RECURSO DE ANULACIÓN interpuesto con fecha 27 de abril de 2022 por el **PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL** contra el laudo arbitral de fecha 12 de enero de 2022 por las causales b) y c) del artículo 63.1 de la Ley de Arbitraje; **EN CONSECUENCIA, VÁLIDO EL CITADO LAUDO y la Decisión N° 16** . Sin costas ni costos. En lo seguidos por **PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL** con **CONSORCIO PRO RURAL** sobre **ANULACION DE LAUDO ARBITRAL**

ESCUDERO LÓPEZ